



Foro de los Países
de América Latina
y el Caribe sobre el
**DESARROLLO
SOSTENIBLE**
Santiago
13 a 16 de abril **2026**

Distr.
LIMITADA
LC/FDS.9/6
30 de abril de 2026
ORIGINAL: ESPAÑOL
2600178[S]

Novena Reunión del Foro de los países de América Latina
y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible

Santiago, 13 a 16 de abril de 2026

RESUMEN DE LA PRESIDENCIA



INTRODUCCIÓN

Durante el trigésimo sexto período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que tuvo lugar en la Ciudad de México, del 23 al 27 de mayo de 2016, los Estados miembros aprobaron la resolución 700(XXXVI), por la que se creó el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible como mecanismo regional para el seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sus metas y sus medios de implementación, incluida la Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo.

La Novena Reunión del Foro tuvo lugar en Santiago, del 13 al 16 de abril de 2016, fue conducida por el Perú, en su calidad de Presidente de la CEPAL, estuvo abierta a la participación de los Estados miembros del Foro y observadores, organismos, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas, coordinadores residentes, entidades regionales y subregionales, instituciones financieras internacionales, el sector privado, el sector académico y la sociedad civil.

El 13 de abril, con anterioridad a los inicios de las actividades oficiales del Foro, tuvieron lugar el Foro de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes de América Latina y el Caribe; el Foro Interreligioso de la Novena Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible; la Reunión del Mecanismo de Participación de Sociedad Civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible; la Reunión de la Plataforma de Colaboración Regional para América Latina y el Caribe, y la Reunión de la Plataforma de Colaboración Regional para América Latina y el Caribe con los Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas en América Latina y el Caribe.

El objetivo de las reuniones del Foro es facilitar el aprendizaje entre pares y compartir experiencias y buenas prácticas entre los países de América Latina y el Caribe respecto de las acciones implementadas para el logro de los ODS en la región.

SESIÓN INAUGURAL

José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), puso de relieve que la Novena Reunión del Foro se realizaba en un contexto caracterizado por la fragmentación geopolítica, el agravamiento de los conflictos bélicos, la competencia por la hegemonía militar, económica y tecnológica y un abierto cuestionamiento del multilateralismo. En ese escenario de grandes dificultades para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, era fundamental fortalecer la acción multilateral, la cooperación y las alianzas entre quienes enarbolaban la bandera del desarrollo sostenible. Destacó las capacidades, los activos y las herramientas con que se contaba, así como el poder de la sociedad civil, el compromiso de diversos sectores y movimientos, la voluntad de los Gobiernos y la presencia del sistema de las Naciones Unidas, e invitó a llevar adelante la Reunión con la convicción de que era posible lograr cambios reales.

A menos de cinco años del plazo previsto para cumplir la Agenda 2030, la tendencia de cumplimiento no era favorable. Con el ritmo observado, la región solo alcanzaría un 19% de las metas, avanzaba a un ritmo demasiado lento en dirección al cumplimiento del 42% de ellas y presentaba un estancamiento o retroceso respecto de 2015 en relación con un 39% de ellas. De las grandes conferencias de las Naciones Unidas celebradas en 2015 y las reuniones de diversos órganos intergubernamentales de la CEPAL habían surgido declaraciones y compromisos importantes sobre los ODS. Puesto que las circunstancias eran adversas, la acción debía ser decisiva. La Agenda 2030 era ambiciosa y los ODS, además de plantear metas, imprimían una dirección. El desarrollo no era un proceso de todo o nada y cada paso en la dirección correcta marcaba

una diferencia en la vida de millones de personas. Recalcó que no era momento de bajar los brazos, sino de seguir trabajando, y reiteró el compromiso de la CEPAL de acompañar a los países en el camino hacia la concreción de los sueños compartidos.

Jorge Félix Rubio, Director General para Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, país que ejercía la Presidencia del Foro, recordó que el Perú había estado comprometido con el proceso de la Agenda 2030 desde sus inicios y destacó que el Foro era una instancia que promovía la colaboración entre los países, la creación de capacidades nacionales, la identificación de retos y metas compartidas, y el aprendizaje entre pares, y constituía una plataforma para forjar alianzas. Más de diez años después de la aprobación de la Agenda 2030, el panorama era incierto, pero era necesario salir adelante. En ese marco, el Perú reafirmaba su compromiso con el multilateralismo y la promoción de una agenda de desarrollo internacional centrada en la inclusión social, la sostenibilidad y la cooperación entre todos los países.

Li Junhua, Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, afirmó que las enormes presiones sobre las perspectivas de desarrollo se veían agravadas por el conflicto en Oriente Medio, lo que constituía un nuevo golpe para una economía mundial ya de por sí frágil y planteaba graves riesgos, especialmente para aquellos países cuyo limitado margen fiscal y monetario y elevada carga de deuda mermaban su capacidad de recuperación. Además, el déficit de financiamiento anual para los ODS, que ascendía a 4 billones de dólares de los Estados Unidos, seguía aumentando a medida que se incrementaba también la presión sobre la cooperación internacional. A pesar de las constantes limitaciones estructurales, la región era pionera en la formulación de políticas centradas en las personas, y el apoyo de la CEPAL era fundamental en ese liderazgo. Los debates del Foro debían enmarcarse en la Declaración Política de Doha y el Compromiso de Sevilla, resultados fundamentales de conferencias celebradas en 2025, que ofrecían una agenda que se reforzaba mutuamente en lo referido a las personas y el financiamiento.

Amina Mohammed, Vicesecretaria General de las Naciones Unidas (por video), afirmó que, tras una década de la aprobación de la Agenda 2030, el panorama regional era desigual, pero revelador en cuanto a los factores que impulsaban y frenaban el progreso. Entre las presiones estructurales interrelacionadas de la región, se encontraban los niveles de pobreza —solo bastaba un choque económico para que un tercio de la población cayera por debajo del umbral de pobreza—; la carga del cuidado que recaía sobre las mujeres; el envejecimiento de la población y la presión sobre los sistemas sanitarios y de protección social, y la carga de la deuda. No obstante, la región se situaba a la vanguardia en muchos aspectos de los ODS, entre ellos los avances en materia de estabilidad económica, la inversión sostenida en las personas, las transiciones industriales ecológicas, los exámenes nacionales voluntarios y la subsanación de las lagunas de datos para un seguimiento riguroso. Abogó por la coherencia de las políticas, unas instituciones más sólidas y una inversión significativa en ciencia, tecnología e innovación, así como por una cooperación regional más eficaz —precisamente lo que la Iniciativa ONU80 se proponía lograr— y animó a adoptar medidas ambiciosas, ya que aún se estaba a tiempo de que América Latina y el Caribe cambiara su trayectoria de cumplimiento de los ODS.

A continuación, se aprobó el **temario de la reunión**.

DIÁLOGOS DE ACCIÓN GLOBAL

Sesión de seguimiento de algunas grandes conferencias de las Naciones Unidas realizadas en 2025: Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Doha, 2025), Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Sevilla (España), 2025), y 30º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Belém do Pará (Brasil), 2025)

Jorge Félix Rubio, Director General para Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, país que ejercía la Presidencia del Foro, en su calidad de moderador, mencionó las tres grandes conferencias de las Naciones Unidas que habían tenido lugar en 2025 —la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, en Doha, la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, en Sevilla (España), y el 30º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en Belém do Pará (Brasil)— e indicó que el objetivo de la sesión era debatir acerca de cómo generar el impulso necesario para implementar los acuerdos aprobados en estas tres conferencias.

Li Junhua, Secretario General Adjunto de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, señaló que en la Declaración Política de Doha, aprobada en la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, los Estados Miembros habían reafirmado su compromiso con los principios acordados anteriormente y habían reconocido que la erradicación de la pobreza, el trabajo decente y la inclusión social no eran solo imperativos morales, sino pilares de unas sociedades estables y prósperas. El éxito de ese marco unificador, con sus hitos claros y sus ciclos de examen para un desarrollo social inclusivo, equitativo y basado en los derechos, dependía de que reflejara las realidades y aspiraciones cotidianas de las personas.

Michelle Muschett, Directora Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señaló que, a pesar de la falta de acuerdos vinculantes sobre la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, de los avances limitados en materia de deforestación y de la ausencia de los líderes de tres de los principales países emisores, en el 30º período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se habían logrado avances sustantivos. Asimismo, se había dado un fuerte respaldo al multilateralismo, cuya legitimidad, frente a las presiones actuales, dependía de la capacidad de traducir los compromisos asumidos en resultados tangibles.

Gabriel Ugarte, Subsecretario de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile, afirmó que el país había logrado reducir la pobreza por ingresos en las últimas décadas y había mejorado la forma de medirla incorporando estándares más exigentes. Afirmó que, para que la protección social fuera sostenible a lo largo del tiempo, se requería sostenibilidad fiscal, por lo que era preciso retomar la senda de crecimiento y garantizar que los recursos públicos generaran el mayor impacto posible en términos de bienestar. Por último, mencionó que la agenda de apoyos y cuidados era una política de Estado en Chile, que reconocía el cuidado como bien público y pilar del desarrollo sostenible.

Laura Oroz, Embajadora de España en Chile, afirmó que en la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo se había transmitido un mensaje claro: solo la movilización de todas las fuentes públicas y privadas permitiría cerrar la brecha de financiamiento de los ODS. El Compromiso de Sevilla establecía compromisos concretos en ámbitos estratégicos y la Plataforma de Acción de Sevilla ofrecía un marco flexible e inclusivo para generar coaliciones de cambio transformadoras. España se comprometía a trabajar con todos los actores para que el espíritu de Sevilla se tradujera en acciones concretas, y la región podía contribuir a ello de manera muy significativa.

Xóchitl Guadarrama Romero, Directora General de Planeación, Evaluación y Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), reafirmó el compromiso de México con los resultados de la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social. Dijo, asimismo, que el Compromiso de Sevilla representaba la decisión colectiva de actualizar la arquitectura financiera internacional para responder a la realidad actual, y reflejaba la voluntad de construir consensos amplios. En cuanto a las negociaciones sobre el cambio climático, sostuvo que América Latina y el Caribe debía participar en ellas con una voz regional unida y reiteró el compromiso de su país de trabajar de manera conjunta con todos los países para lograr resultados en ese ámbito.

Paulo Soares Pacheco, Embajador del Brasil en Chile, afirmó que, en el 30° período de sesiones de la Conferencia de las Partes, celebrado en su país, se habían producido avances en tres frentes: normativo, climático multilateral y de compromisos políticos, e innovaciones en la implementación de la acción climática. Se había reconocido la urgencia de la crisis climática y 190 países habían renovado su compromiso de luchar contra el calentamiento global, se habían lanzado distintas iniciativas y se habían iniciado debates relevantes, como los relativos a la reducción del uso de los combustibles fósiles y la necesidad de revertir la deforestación.

Rosario Díaz Garavito, Cofacilitadora del Mecanismo de Participación de Sociedad Civil en la Agenda de Desarrollo Sostenible y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, dijo que se estaba atravesando un momento geopolíticamente complejo y decisivo para el futuro del multilateralismo. Los acuerdos aprobados en las tres conferencias constituían una hoja de ruta integral para enfrentar las crisis interconectadas actuales, pero su implementación debía tener como base innegociable los derechos humanos. La credibilidad del sistema multilateral dependía de su capacidad de salvaguardar esos derechos, y la sociedad civil se comprometía a seguir articulando y vigilando dicha implementación.

Intervenciones de las delegaciones

La representante de **Costa Rica** hizo referencia a la Conferencia de las Naciones Unidas de 2025 para Apoyar la Implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 14: “Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible”, coorganizada por su Gobierno y el de Francia, en la que se había aprobado el Plan de Acción Oceánica de Niza. La representante de **Colombia** señaló algunos aspectos en los que su país había tenido una participación protagónica en el 30° período de sesiones de la Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, como la inclusión explícita del papel de los pueblos afrodescendientes en la acción climática o la aplicación de enfoques de género y derechos humanos en las negociaciones. El representante de **Cuba** afirmó que solo se podría avanzar hacia el desarrollo sostenible con un sistema de financiamiento justo y accesible, y que las medidas coercitivas unilaterales impuestas sobre su país constituían un obstáculo para la obtención de financiamiento externo y no le permitían avanzar en la implementación de la Agenda 2030.

La representante de **Guatemala** reafirmó el compromiso pleno de su país con la Declaración Política de Doha de la Cumbre Social Mundial bajo la denominación “Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social”, el Compromiso de Sevilla y la Hoja de Ruta de Bakú a Belém hacia los 1,3 Billones, entre otros acuerdos e instrumentos emanados de las conferencias. El representante de la **República Dominicana** celebró los resultados de las tres conferencias, que fortalecían las posibilidades de la región de alcanzar los ODS, y se refirió al problema del sargazo, que cada año era más grave y debía afrontarse con la colaboración de todos los países. El representante de **Panamá** explicó que su país había llevado a cabo una transición energética audaz que le había permitido al país eliminar totalmente el carbón de su matriz energética y llamó a fortalecer los marcos de cooperación internacional para que los criterios de financiamiento consideraran también la vulnerabilidad climática y los esfuerzos de gestión fiscal responsable. Por último, la representante de **Alemania** reafirmó el compromiso de su país con la alianza estratégica que existía entre la CEPAL y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, que

permitía contribuir al fortalecimiento de capacidades en la región y cooperar en temas de gran relevancia para la transición económica, digital y energética. Hizo hincapié, asimismo, en el papel central de la economía del cuidado como pilar para el desarrollo.

Sesión sobre la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026 para Acelerar la Consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6: “Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos” (Emiratos Árabes Unidos, 2 a 4 de diciembre de 2026)

Juan Diego Ruiz, Jefe de la Oficina Multinacional en la Región Andina y el Cono Sur del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), en su calidad de moderador, recordó que, según la CEPAL, América Latina y el Caribe había registrado modestos avances en el acceso a servicios de agua potable e higiene y la gestión integrada de recursos hídricos, aunque persistían brechas significativas en los ámbitos de saneamiento, tratamiento y reutilización de aguas residuales, así como en la protección y restauración de ecosistemas relacionados con el agua, con marcadas desigualdades territoriales y sociales. Ese desempeño reflejaba, en parte, las restricciones fiscales y las insuficientes capacidades institucionales para ampliar el alcance de los proyectos de seguridad hídrica.

Davis Aracena, Viceministro de Suelos y Aguas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, dijo que la región vivía una situación crítica en materia de agua, ante la creciente presión del cambio climático, la degradación de los ecosistemas, las brechas de acceso a servicios y las debilidades de gestión del recurso. El principal reto era la transformación de planes y políticas en compromisos e inversiones concretas, sostenibles y ejecutables, y había que adoptar un nuevo paradigma para fortalecer la gobernanza y mejorar la valoración del agua, movilizar financiamiento innovador y promover una mayor articulación intersectorial.

Olga Isaza, Directora Regional Adjunta para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), centró su presentación en cuatro ideas clave: i) el compromiso del UNICEF para que cada niño y cada niña tuviera acceso seguro y digno al agua y el saneamiento; ii) los cuatro desafíos estructurales que persistían en la región; iii) las cinco prioridades de acción más urgentes para enfrentar esos desafíos, y iv) los tres factores habilitantes o facilitadores estratégicos que se necesitaban para que las acciones urgentes tuvieran un impacto a escala y tangible en la vida de las personas.

Julián Suárez, Gerente de Desarrollo Territorial Sostenible y Representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Chile, afirmó que la región no tenía un problema de agua, sino de inversión, gestión y gobernanza del recurso. La gestión inadecuada del agua constituía una restricción estructural al desarrollo, que afectaba la salud, la productividad, la cohesión social y la competitividad de los territorios. Destacó tres prioridades: i) invertir más y mejor, ii) superar el enfoque territorial y priorizar la gestión integrada del recurso y iii) implementar una nueva arquitectura de financiamiento para llevarlo a escala subnacional y territorial.

Antumalen Antillanca Urrutia, Coordinadora del Centro Indígena de Acción Integral (CIAI) de Chile, destacó la importancia del agua en los territorios y la persistencia de profundas desigualdades en el acceso a agua potable y saneamiento, que afectaba sobre todo a sectores tradicionalmente excluidos. La crisis era estructural y se vinculaba a modelos de desarrollo que profundizaban la desigualdad y la degradación ambiental. Las generaciones más jóvenes planteaban propuestas concretas e impulsaban soluciones, como el establecimiento de sistemas comunitarios de acceso al agua, la puesta en marcha de iniciativas de educación ambiental y el diseño de herramientas innovadoras para la gestión sostenible del recurso.

José Sáez Albornoz, Gerente General de Aguas Andinas, Chile, expresó que las cifras de gestión del agua en la región mostraban la existencia de desigualdad estructural, riesgos sanitarios y limitaciones al desarrollo económico, y que el desafío era aún mayor en materia de saneamiento. Al referirse al aporte de Aguas Andinas al desarrollo económico de Chile mediante la instalación de biofactorías, dijo que era

posible alcanzar la universalización del servicio y el saneamiento efectivo cuando existían marcos institucionales sólidos, y que el servicio continuo, seguro y de calidad era fruto de un trabajo planificado. Las prioridades eran tres: cerrar la brecha de saneamiento, invertir en resiliencia hídrica y acelerar la transición hacia la economía circular del agua, con la gobernanza como elemento transversal.

Flor Emilia Ramírez, Intendente de Agua de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos de Costa Rica (virtual), afirmó que su país tenía una cobertura casi universal de agua potable, pero no ocurría lo mismo con el saneamiento. La regulación centralizada no había contribuido de manera positiva al desarrollo del país y persistían marcadas brechas territoriales y problemas vinculados al establecimiento de prioridades, la planificación, la articulación interinstitucional y la movilización de recursos. Era preciso cambiar el enfoque hacia los territorios y garantizar la sostenibilidad del acceso a los servicios para las futuras generaciones. La principal meta para los próximos años era resolver el ciclo del agua con equidad territorial.

Kaveh Madani, Director del Instituto de Agua, Medioambiente y Salud de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-INWEH) (virtual), destacó el informe del Instituto¹ que había sido publicado poco tiempo atrás, en el que se mencionaba la “bancarrotta hídrica” mundial, que señalaba un cambio hacia una era de poscrisis caracterizada por un uso insostenible del agua, fallos cada vez más frecuentes en los sistemas y una degradación irreversible de los ecosistemas. La inseguridad hídrica afectaba tanto a las regiones con escasez de agua como a las que disponían de abundantes recursos hídricos, y era necesario gestionar esta situación mediante límites vinculantes, la protección del capital natural, el refuerzo del financiamiento, la transferencia de tecnología y una gobernanza inclusiva, con el fin de impulsar el desarrollo sostenible y la cooperación internacional.

Intervenciones de las delegaciones

La representante de **México** dijo que su país reconocía la importancia del agua como recurso indispensable para la vida, la salud, el bienestar y el desarrollo sostenible, y que era prioritario fortalecer la coordinación internacional y elevar el compromiso político en favor de la seguridad y la justicia hídrica, áreas en que las Naciones Unidas debían desempeñar un papel importante. El representante de **Costa Rica** precisó que era urgente fortalecer la infraestructura multilateral del agua, dotándola de mayor coherencia, articulación y atención política sostenida. Su país había promovido un enfoque integral y basado en derechos humanos para la gestión del recurso, estableciendo un mecanismo nacional de gobernanza del agua con la participación de distintos sectores. La representante de **Colombia** puntualizó que la región no tenía un problema de escasez de agua, sino de gobernanza. No existía únicamente un modelo empresarial de gestión hídrica y era preciso reconocer el modelo de gestión comunitaria, que siempre había estado presente en los territorios, pero había sido invisibilizado. La representante del **Perú** destacó que era esencial fortalecer el enfoque del nexo entre agua, energía y alimentación, promover la gestión integrada y sostenible de los recursos hídricos, mejorar el tratamiento de aguas residuales, incrementar la eficiencia en el uso del agua en todos los sectores y consolidar su contribución al desarrollo económico y social.

La representante del **Ecuador** indicó que su país, que priorizaba el acceso universal a agua potable y saneamiento, la gestión integrada de recursos hídricos y la resiliencia frente al cambio climático, había establecido la seguridad hídrica como eje transversal de su política pública y avanzaba en varias líneas estratégicas para enfrentar la falta de gestión, inversión y gobernanza del agua. El representante del **Uruguay** destacó la larga historia de provisión de agua potable de calidad y la amplia infraestructura de saneamiento del país, donde la extracción del agua se reconocía como una actividad pública y su gestión debía llevarse adelante en virtud de un enfoque de protección de las cuencas hídricas. El representante de

¹ Madani K. (2026) *Global Water Bankruptcy: Living Beyond Our Hydrological Means in the Post-Crisis Era*, United Nations University Institute for Water, Environment and Health (UNU-INWEH), Richmond Hill, Ontario, Canada, doi: 10.53328/INR26KAM001.

Francia señaló que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026 para Acelerar la Consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 6, que se celebraría en diciembre de ese año en los Emiratos Árabes Unidos debía servir para construir un proceso a largo plazo para la gobernanza mundial del agua, con mensajes políticos decididos y compromisos claros y viables.

María José Lubertino, Cofacilitadora de la Mesa de Vinculación del Mecanismo de Participación de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe para el Desarrollo, y Juanita Ariza Guzmán, Directora de la Red Nacional del Agua de Colombia y Punto Focal del Grupo de Justicia Ecológica y Ambiental (grupo de trabajo del Mecanismo de Sociedad Civil), destacaron la importancia de seguir apostando por el multilateralismo regional. Al referirse a la riqueza de la región en materia de biodiversidad, recalcaron que el agua no era una mercancía, sino un bien común, y que no había que limitarse a hablar de su distribución, sino que era preciso hacer hincapié en el cuidado de las fuentes y reservas hídricas. Las iniciativas orientadas a privatizar el recurso no eran buenas, como tampoco era bueno que, para llevar a cabo la transición energética, se pusieran en riesgo las fuentes de agua. El agua debía reconocerse como un asunto de seguridad estratégica nacional e internacional y en todos los países de América Latina y el Caribe debían crearse instituciones para abordar el tema de los recursos hídricos, a fin de lograr una coordinación al respecto a nivel regional.

Al cierre, **el moderador** subrayó la enorme importancia de la gestión de los recursos hídricos para diversos ámbitos del desarrollo, como educación, salud, acción climática, economía, sistemas agrícolas y agroalimentarios, seguridad nacional, empoderamiento y participación social, en especial en las comunidades rurales. Había que procurar que las políticas públicas fueran no solo más eficaces, sino, sobre todo, más legítimas y democráticas.

Presentación del documento *Agenda 2030 en América Latina y el Caribe: ¿cómo acelerar el paso hacia su cumplimiento en la nueva era de incertidumbre y fragmentación geopolítica?*, noveno informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en América Latina y el Caribe

José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, presentó el documento² y señaló que la región enfrentaba el cumplimiento de la Agenda 2030 en un contexto de creciente incertidumbre y fragmentación geopolítica, marcado por el debilitamiento del multilateralismo, la rivalidad tecnológica, el avance del proteccionismo, la transición hacia una interdependencia instrumentalizada, la persistencia de la desigualdad y el agravamiento de la crisis climática. A esto se sumaban rezagos estructurales en materia de crecimiento, capacidades institucionales, espacio fiscal y acceso al financiamiento. En este sentido, indicó que, de mantenerse las tendencias actuales, la región solo alcanzaría el 19% de las metas de los ODS en 2030, mientras que el 42% de las metas avanzaba en la dirección prevista de cumplimiento, aunque a un ritmo insuficiente, y el avance hacia el cumplimiento del 39% de las metas permanecía estancado o en retroceso. Estos resultados eran peores que los de 2025.

El Secretario Ejecutivo destacó que, para acelerar la implementación de la Agenda 2030, se necesitaba una mayor articulación entre los Gobiernos, la sociedad civil, el sector académico, el sector privado y otros actores, así como el fortalecimiento de la cooperación regional e internacional. En el plano nacional, esto suponía reforzar las capacidades institucionales técnicas, operativas, políticas y prospectivas (TOPP), y ampliar la movilización de recursos internos. Finalmente, reiteró que la CEPAL y el sistema de las Naciones Unidas continuaban apoyando a los países de la región en el diseño y la implementación de políticas orientadas al cumplimiento de la Agenda 2030, y afirmó que la cooperación, las alianzas pragmáticas y la acción colectiva continuaban siendo esenciales para avanzar hacia un desarrollo más inclusivo y sostenible.

² Véase [en línea] <https://foroalc2030.cepal.org/2026/es/documentos/agenda-2030-america-latina-caribe-como-acelerar-paso-su-cumplimiento-la-nueva-era>.

Intervenciones de las delegaciones

El representante de la **República Dominicana** se refirió a las trampas del desarrollo mencionadas en el documento de posición de la CEPAL y dijo que en la unión de los países de la región se encontraban muchas de las soluciones que permitirían superar esas trampas mediante la cooperación y la integración regional. La representante del **Perú** mencionó que los desafíos en el ámbito social limitaban el desarrollo sostenible en la región y la respuesta pasaba por fortalecer las capacidades productivas, movilizar financiamiento y renovar el compromiso con el multilateralismo y la cooperación internacional. La representante de **Costa Rica** describió los avances de su país en el cumplimiento de los ODS y se refirió a las dificultades que enfrentaban los países de renta media y media alta para acceder a la asistencia oficial para el desarrollo (AOD), a pesar de su vulnerabilidad, por lo que los instrumentos internacionales de financiamiento eran fundamentales. El representante del **Uruguay** subrayó que la defensa del multilateralismo era un objetivo estratégico y resaltó el compromiso de su país con este. Abogó por una visión del desarrollo que reconociera su carácter multifacético y la importancia del acceso a financiamiento.

La representante del **Ecuador** destacó que el desarrollo era un logro colectivo y que no era posible alcanzarlo sin garantizar condiciones básicas y la capacidad para responder a las necesidades de la población joven; no bastaba con reafirmar compromisos, era necesario crear las condiciones materiales que hicieran posible su cumplimiento para promover el crecimiento inclusivo. El representante del **Brasil** recalcó el compromiso de su país con organismos fundamentales de cooperación internacional y mencionó la importancia de la bioeconomía como solución transversal con impacto directo en varios ODS. Señaló también que el cumplimiento de la Agenda 2030 dependía de la capacidad de actuación en alianzas y de la cooperación robusta para avanzar sin dejar a nadie atrás. La representante de **México** resaltó la importancia de la Agenda 2030 como hoja de ruta y la oportunidad existente para crear un modelo de desarrollo sostenible con una visión propia de la región, así como la necesidad de fortalecer a la CEPAL y las Naciones Unidas, y forjar alianzas con el Sur Global. Era urgente respaldar el multilateralismo de manera organizada y conjunta para que se escucharan las voces de la región.

El representante de las **Islas Vírgenes Británicas** dijo que la inversión en el acceso a los datos era importante, pero los recursos necesarios para hacer posible el progreso que dichos datos pretendían medir eran aún más importantes. El modelo de cooperación para el desarrollo ya no era viable; había que centrarse en atraer inversiones. Existía un círculo vicioso en que las economías caribeñas que no podían optar a la AOD se veían obligadas a recurrir a préstamos para financiar la recuperación después de los desastres de obras que, a su vez, habían sido financiadas con préstamos destinados a la reconstrucción después de desastres anteriores. La representante de **Colombia** señaló que el proceso de desarrollo sostenible debía incluir a todos los sectores sociales y que había que poner en marcha acciones contundentes y efectivas para promover la transformación social.

La representante de la **Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)** dijo que el desarrollo productivo era el motor del crecimiento, fundamental para generar empleo de calidad e impulsar la innovación, la diversificación económica y la transición verde, y llamó a integrar la perspectiva de género en las políticas relativas a ese ámbito. La representante de la **Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH)** agradeció a la CEPAL la labor conjunta para vincular los ODS con los derechos humanos y afirmó que la integración del enfoque de derechos humanos en la implementación de la Agenda 2030 ayudaba a reducir la desigualdad y combatir la pobreza. La representante del **Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA)** dijo que, aunque la región había mostrado avances en el tema, como un mayor acceso al tratamiento y la reducción de la mortalidad y de la transmisión de la enfermedad de madre a hijo, era fundamental enfrentar los desafíos del estigma y la exclusión.

La representante de la **Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres)** se refirió a la importancia de romper el silencio estadístico, generar datos robustos para medir el progreso de los ODS, en particular el ODS 5, y fortalecer los sistemas nacionales de estadística para visibilizar las desigualdades estructurales de las mujeres. La representante de la **Organización Internacional para las Migraciones (OIM)** llamó a reconocer la contribución positiva de la movilidad humana y el papel de los migrantes como agentes de cambio y catalizadores del desarrollo sostenible, y pidió que se fortaleciera la gobernanza migratoria y se incluyera a las personas migrantes en el diseño de políticas. La representante de la **Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO)** afirmó que los sistemas agroalimentarios enfrentaban limitaciones estructurales, como el alto costo de los alimentos y de las dietas saludables, y llamó a fortalecer la innovación, la coordinación y la movilización de recursos. El representante del **Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat)** se refirió a la situación preocupante que vivía la población de los barrios marginales como consecuencia de problemas estructurales, como los costos de la vivienda y la deficiencia de los procesos de planificación urbana.

Contribución del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe y presentación del informe sobre los resultados de todo el sistema de la Plataforma de Colaboración Regional para América Latina y el Caribe, 2025

José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en su calidad de Vicepresidente de la Plataforma de Colaboración Regional para América Latina y el Caribe, ofreció un panorama de la Plataforma, cuyas funciones eran, entre otras, fomentar la colaboración para lograr el desarrollo sostenible y promover la coherencia regional con las políticas acordadas a nivel mundial. Asimismo, presentó los mecanismos de trabajo sustantivos relativos al cambio climático, el crecimiento equitativo, la movilidad humana y la gobernanza para la paz. Para concluir, mencionó algunas de las actividades llevadas a cabo en cada área, como la actualización del sitio web para mejorar el acceso al conocimiento.

Michelle Muschett, Directora Regional para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en su calidad de Vicepresidenta de la Plataforma de Colaboración Regional para América Latina y el Caribe, dijo que la Plataforma era un espacio flexible, que tenía en cuenta las distintas necesidades de los países. Detalló los principales logros en los distintos ámbitos de trabajo, en especial el apoyo brindado a los equipos en el país en relación con la gestión de incendios, la adaptación y la respuesta frente a los desastres. Mencionó las prioridades regionales en materia de educación, salud, sistemas alimentarios y transformación digital, y destacó la importancia de la acción multilateral coordinada.

Juan Bello, Director y Representante Regional del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), en su calidad de Copresidente de la coalición temática sobre cambio climático y resiliencia, señaló que la prioridad de la coalición había sido apoyar a los Estados Miembros en un contexto climático complejo y dinámico. Se refirió al desarrollo de productos analíticos conjuntos, que ponían de manifiesto la exposición de la población y la infraestructura a los riesgos climáticos. Afirmó que, para continuar respondiendo a la creciente demanda de los coordinadores residentes, la coalición se centraría en fortalecer la colaboración regional, avanzar en la agenda climática y brindar más apoyo a los equipos en el país en el marco de la Iniciativa ONU80.

Dalila Gonçalves, Directora Regional para América Latina y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), en su calidad de Copresidenta de la coalición temática sobre gobernanza para la paz, la justicia y las instituciones sólidas, afirmó que el Laboratorio de Información de las Naciones Unidas sobre Delitos y Corrupción para América Latina y el Caribe, que se había utilizado para ofrecer orientación normativa integrada sobre las prioridades del ODS 16, constituía

una herramienta fundamental de la coalición y puso ejemplos de su repercusión práctica en el Caribe, Centroamérica y América del Sur.

Esther Kuisch, Directora Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, en su calidad de Copresidenta del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Dejadas Atrás, dijo que el Grupo había mostrado el valor que agregaba al subsanar las lagunas normativas mediante sinergias entre los distintos pilares y al dar voz a quienes no suelen ser escuchados en los foros normativos mundiales. Su objetivo para 2026 era pasar de las conclusiones a los resultados, garantizando que el enfoque sistémico de la Plataforma de Colaboración Regional se tradujera en una reducción cuantificable de las desigualdades en toda la región.

Roberto Valent, Director Regional para América Latina y el Caribe de la Oficina de Coordinación del Desarrollo (OCD) de las Naciones Unidas, destacó el valor del apoyo regional a la labor de los coordinadores residentes y los equipos en el país. Asimismo, en relación con la Plataforma, subrayó la importancia de responder de manera ágil a las necesidades que fueran surgiendo, reforzar la coordinación a nivel regional y nacional y seguir promoviendo la coherencia del sistema de las Naciones Unidas, utilizando la Plataforma como vehículo para fortalecer la cooperación regional. Para concluir, invitó a fomentar esa colaboración para avanzar hacia un desarrollo sostenible inclusivo y resiliente en América Latina y el Caribe.

Intervenciones de las delegaciones

El representante de **Cuba** agradeció a los organismos del sistema de las Naciones Unidas y mencionó ejemplos de cooperación multilateral que habían ayudado a su país en distintas circunstancias, como en la recuperación después del huracán Melissa. El representante de las **Islas Vírgenes Británicas** se sumó a las observaciones formuladas en la sesión previa por el representante de México en relación con las graves limitaciones del sistema de desarrollo existente y la necesidad de un modelo alternativo que atendiese mejor las necesidades de la región.

María José Torres Macho, Coordinadora Residente del sistema de las Naciones Unidas en Chile, mencionó tres temas en los que habían estado trabajando la Oficina: la delincuencia organizada a nivel regional, los incendios y la movilidad humana.

Luis Yáñez, Secretario de la CEPAL, afirmó que, pese a las dificultades que se estaban enfrentando, todos los recursos del sistema de las Naciones Unidas se destinaban al avance del cumplimiento de la Agenda 2030, y agradeció el apoyo recibido en ese sentido.

Implementación de la Agenda de Antigua y Barbuda para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo a través de la cooperación Sur-Sur

Benito Wheatley, Enviado Especial del Primer Ministro de las Islas Vírgenes Británicas, en su calidad de moderador, señaló que la tarea que se planteaba consistía en acelerar una aplicación más práctica, estratégica y adaptada de la Agenda de Antigua y Barbuda, entre otras cosas mediante la cooperación entre los países del Sur Global y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), la mejora de los datos, el fortalecimiento de la capacidad institucional y la coordinación regional, al tiempo que se reconocía no solo la vulnerabilidad del Caribe, sino también su relevancia estratégica, su innovación y su valor.

Joy-Marie King, Directora de Comercio Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio y Asuntos de Barbuda de Antigua y Barbuda, tras recordar las amenazas existenciales a las que se enfrentaban los PEID, afirmó que la Agenda de Antigua y Barbuda para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo era una hoja de ruta cuyo éxito dependía de la aceleración del cumplimiento. La larga trayectoria del Caribe en la promoción de las prioridades de los PEID a escala mundial quedaba

reflejada en los numerosos ejemplos de cooperación regional establecidos y en la puesta en marcha de soluciones prácticas y escalables, así como en iniciativas relacionadas con el clima y la resiliencia que abordaban las vulnerabilidades de la región y generaban conocimientos que podían beneficiar a otros. Sin embargo, la ambición sin financiamiento era fútil: el acceso al financiamiento en condiciones favorables, la reforma de la arquitectura financiera mundial y los mecanismos de financiamiento innovadores resultaban esenciales. Otros elementos clave para la aceleración eran las inversiones centradas en las personas, el desarrollo de capacidades y la transformación digital, que exigían urgencia, colaboración y rendición de cuentas. El Caribe estaba dispuesto a dar ejemplo para convertir la visión en acción y los compromisos en logros tangibles de desarrollo sostenible para todos.

Carlos Applewhaite, Analista de Desarrollo de la Secretaría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Instituto de Planificación de Jamaica, agradeció a la CEPAL su rápida evaluación de los daños y pérdidas realizada inmediatamente después del huracán Melissa. Los daños habían equivalido a más del 50% del PIB de Jamaica en 2025, pero el huracán también había dejado algunas lecciones: era necesario contar con un sistema de financiamiento del riesgo de desastres en varios niveles, ese financiamiento no sustituía el fortalecimiento de la resiliencia, y las brechas en la aplicación, el funcionamiento y el ámbito social perjudicaban los resultados.

Mildred Martínez, Directora General de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) de la República Dominicana, se refirió al aprovechamiento de las alianzas para la producción de datos oficiales para la gestión del riesgo de desastres, y compartió los resultados obtenidos y los desafíos enfrentados en el marco del proyecto “Datos administrativos para los indicadores desglosados de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, tramo 13 de la Cuenta de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Debido a que su país era particularmente sensible a los fenómenos climáticos extremos, contar con datos era esencial para la toma de decisiones y la planificación. El principal reto en ese sentido era la transformación de los datos disponibles en estadísticas oficiales, comparables y de calidad.

Elizabeth Bradley, Secretaria Permanente de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Negocios Internacionales y Cooperación Internacional de Suriname, afirmó que la Agenda de Antigua y Barbuda era importante porque ningún país de la región podía desarrollar su resiliencia por sí solo. Al mencionar los esfuerzos de Suriname en materia de recopilación y gestión de datos sobre desastres, resiliencia y desarrollo sostenible, se refirió a la cooperación activa con instituciones subregionales, así como a la cooperación triangular y las alianzas con el Brasil y la Guayana Francesa, que habían dado lugar a avances tecnológicos y habían reforzado la preparación y la respuesta ante desastres. Del mismo modo, el intercambio de los conocimientos adquiridos gracias a las iniciativas nacionales había beneficiado a toda la región. La capacidad institucional era fundamental para la implementación, y la CEPAL había prestado un valioso apoyo técnico en ese sentido. Concluyó con cinco mensajes clave: la cooperación Sur-Sur no era opcional, sino fundamental; las plataformas regionales convertían la vulnerabilidad compartida en resiliencia compartida; los datos, la planificación y el financiamiento debían complementarse; los resultados cuantificables generaban confianza y reforzaban la rendición de cuentas, y la resiliencia se forjaba antes de que se produjeran los desastres, no después de ellos.

Carla Barnett, Secretaria General de la Comunidad de Caribe (CARICOM), afirmó que la puesta en práctica de la Agenda de Antigua y Barbuda no podía basarse en las modalidades tradicionales, y que los países del Sur Global y los PEID se encontraban en una posición privilegiada para cooperar con ese fin. La CARICOM apoyaba ese objetivo en varios ámbitos, entre otros, a través de centros regionales de formación y redes de respuesta ante desastres. Hizo un llamamiento a que los PEID de todas las regiones intercambiaran buenas prácticas con el fin de replicar y ampliar soluciones que hubieran demostrado su eficacia.

Intervenciones de las delegaciones

El representante de **Cuba** subrayó la importancia de la cooperación internacional para garantizar la sostenibilidad de las estrategias de desarrollo de los países del Caribe. Debían asumirse compromisos concretos de apoyo a los PEID, que necesitaban financiamiento específico, accesible y adaptado a sus vulnerabilidades frente al cambio climático y las crisis económicas. También hizo referencia a las medidas unilaterales de bloqueo que afectaban a su país. La representante de **Curaçao** afirmó que la cooperación entre los PEID brindaba valiosas oportunidades para compartir buenas prácticas y abordar retos únicos, y el aprendizaje entre iguales era fundamental para fomentar la resiliencia y la inclusión, así como para hacer frente a las vulnerabilidades comunes. Su país estaba comprometido con la cooperación Sur-Sur para ofrecer soluciones prácticas y sostenibles a las comunidades del Caribe. El representante de las **Islas Vírgenes Británicas (en su calidad de representante nacional)** agradeció a la CEPAL y al sistema de las Naciones Unidas su apoyo inquebrantable. El futuro de la cooperación para el desarrollo se apoyaba en dos pilares: la Agenda de Antigua y Barbuda para los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (de los PEID para los PEID), y la cooperación Sur-Sur, que se adaptaba a las necesidades de los países en desarrollo, ya que el Norte Global tenía la arquitectura financiera internacional bajo su control. Era necesario superar las barreras a la colaboración regional —la principal era el idioma— y redoblar los esfuerzos, ya que el Caribe era demasiado pequeño para influir en los factores externos que afectaban a la subregión.

El representante del **PNUMA** celebró el sólido liderazgo caribeño en la Mesa de la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente de este año y mencionó varias iniciativas del Programa en diversos organismos regionales relacionadas con cuestiones que afectaban a los PEID. Señaló, además, que todos los panelistas habían destacado la importancia de los datos y la información para la aplicación de la Agenda de Antigua y Barbuda. La representante de la **FAO** dijo que la Organización había hecho especial hincapié en apoyar la transformación del sistema agroalimentario de los PEID, como demostraba la existencia de una oficina y un programa de trabajo específicamente creados a tal efecto. El Plan de Acción de la FAO para 2026-2027, destinado a apoyar la transformación de los sistemas agroalimentarios en los PEID, los países menos adelantados y los países en desarrollo sin litoral, recogía el compromiso de reforzar la resiliencia y acelerar la consecución de los ODS. La representante de la **ONUDI** señaló que la Organización apoyaba la resiliencia y la prosperidad del Caribe mediante iniciativas en materia de diversificación económica, desarrollo industrial sostenible, energías renovables y economía azul. Destacó el funcionamiento del Centro de la ONUDI para los PEID, que había prestado asistencia técnica y llevado a cabo intervenciones regionales adaptadas a las necesidades locales. Manifestó su convicción de que la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular constituían una vía concreta y práctica, que no se aprovechaba plenamente, para la cooperación interinstitucional, especialmente en el Caribe. El representante de **ONU-Mujeres** recalcó que debía ponerse la igualdad de género en el centro de la cooperación Sur-Sur y dejó tres mensajes clave: la vulnerabilidad era estructural no natural, el cambio climático era también una crisis económica con sesgo de género y la resiliencia pasaba por invertir en las mujeres, no solo por protegerlas.

Mesa 1. ODS 6: Agua limpia y saneamiento

René Orellana Halkyer, Subdirector General y Representante Regional para América Latina y el Caribe de la FAO, en su calidad de moderador, dijo que el tema del agua no era periférico, sino estructural. Sin agua no había salud pública, producción de alimentos, energía segura, ecosistemas funcionales ni resiliencia. Destacó las desigualdades y desafíos existentes en materia de acceso, calidad, asequibilidad, gobernanza, financiamiento y capacidades. La gestión del agua requería avanzar hacia una gobernanza basada en la dependencia entre agua, sistemas agroalimentarios, energía, ecosistemas y cohesión territorial. Brindó algunas orientaciones para el diálogo, destacando la necesidad de aumentar la escala, la velocidad y la coherencia de las acciones.

Ruth Quevedo, Viceministra de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, planteó la visión de su país sobre la transición hídrica, que se orientaba al cierre de brechas, la gobernanza democrática del agua y la ordenación territorial alrededor del agua. El ODS 6 no debía abordar solo aspectos técnicos o de infraestructura, sino también las relaciones sociales en torno al agua. La justicia hídrica que proponía su país planteaba los retos de retomar el papel del Estado, fortalecer la colaboración regional, impulsar la innovación, la ciencia y el reconocimiento de las tecnologías tradicionales, e incrementar el financiamiento Norte-Sur.

David Fariña, Director General de Protección y Conservación de los Recursos Hídricos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible del Paraguay, se refirió a la gestión de los cauces hídricos superficiales y subterráneos, y destacó que el Acuífero Guaraní era uno de los pocos que contaba con un sistema de gobernanza aprobado por un acuerdo internacional entre cuatro países. La estrategia del país para la gestión del acuífero se basaba en el intercambio de información, la automatización de estaciones y la actualización de la gobernanza en coordinación con todas las instituciones vinculadas.

Hernán Chiriboga, Representante en Chile del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), destacó que existían muchas tecnologías para optimizar el uso del agua en la agricultura de la región. Mencionó las experiencias de bajo costo desarrolladas en el predio demostrativo de agricultura regenerativa de Cuncumén (Región de Valparaíso (Chile)), la producción de arroz con riego en lugar de inundación del terreno, que permitía disminuir el consumo de agua y la emisión de metano, y el desarrollo de una vasija con microporos para microhuertos y agricultura urbana con bajo consumo de agua.

James Mcphee, Profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Chile, dijo que la lentitud en el avance hacia el cumplimiento del ODS 6 se debía a razones políticas, pues era preciso priorizar esfuerzos y energías para ir en esa dirección. No se asignaba suficiente relevancia y urgencia al tema del agua y la comunidad científica debía ser capaz de precisar los problemas vinculados al agua y los plazos y magnitudes en que se presentarían para contribuir a la toma de las decisiones necesarias de política pública. Dijo que se debía reformar el papel del sector académico en esta área e hizo un llamado a acercarse a esa comunidad y dialogar con ella.

Intervenciones de las delegaciones

La representante del **Brasil** se refirió al marco legal del país, que reconocía el acceso al agua como un derecho fundamental. Mencionó diversos avances, pero señaló también el reto persistente de incluir a los grupos tradicionalmente excluidos. El país medía en forma desagregada los datos para el ODS 6, lo que permitía detectar las brechas existentes. La representante del **Ecuador** mencionó algunos logros del país respecto del ODS 6, incluidos avances en lo legal, para garantizar el derecho al agua, y en lo productivo, para fortalecer la seguridad alimentaria, en el marco de un enfoque de derechos humanos. Señaló también el desafío persistente de disminuir las brechas. La representante de **Suriname** señaló que, a pesar de los abundantes recursos hídricos de su país, el acceso a servicios de agua potable y saneamiento gestionados de forma segura seguía siendo desigual, con importantes deficiencias en la cobertura y el tratamiento de las aguas residuales. Se estaban llevando a cabo iniciativas para ampliar las infraestructuras y proteger los ecosistemas, pero los avances se habían visto limitados por las presiones climáticas y por la escasez de financiamiento y de capacidad. El representante de **Panamá**, tras reiterar que el acceso al agua era un derecho, mencionó diversos avances en materia de cierre de brechas de acceso mediante la construcción de plantas potabilizadoras, la perforación de nuevos pozos profundos y la purificación y almacenamiento de agua, reconociendo también el reto de la cobertura de saneamiento sobre todo en las áreas rurales. La representante de **México** dijo que lo que permitía avanzar en materia de agua eran las alianzas entre el Gobierno y el resto de los sectores y que esas alianzas cobraban sentido cuando se traducían en acciones. La sostenibilidad no era solo un discurso, sino que se relacionaba con la política. Cuando faltaba el agua, se vulneraban muchos derechos y garantizar el agua era garantizar la vida.

El representante del **PNUMA** mencionó la pérdida de biodiversidad, ecosistemas y riqueza hídrica en la región. En la XXIV Reunión del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, celebrada en Lima, del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2025, se había subrayado la necesidad de poner el agua en el centro de todas las discusiones en ese ámbito y se habían acordado diversas iniciativas en ese sentido. La representante de la **FAO** destacó que el sector agrícola era clave para atender a la crisis del agua. La FAO abogaba por mantener la atención política en ese tema al más alto nivel, promovía la inversión en la gestión sostenible del agua y destacaba la importancia de favorecer una gobernanza inclusiva del agua con la participación equitativa de todos los sectores vinculados. El representante de **ONU-Mujeres** recalcó que el agua no era solo un recurso y que el acceso a ella era una condición habilitante para la igualdad, la salud y la agenda de desarrollo sostenible en su totalidad. Invertir en agua y saneamiento con enfoque de género tenía efectos multiplicadores para las mujeres y las niñas, así como para las comunidades.

Juanita Ariza Guzmán, Directora de la Red Nacional del Agua de Colombia y punto focal del grupo de justicia ecológica y ambiental del Mecanismo de Participación de Sociedad Civil, se refirió a la necesidad de implementar medidas en todos los niveles, así como planes, proyectos y políticas que permitieran establecer una hoja de ruta para el logro de los ODS hacia 2030, y destacó la necesidad de reconocer que el agua era un asunto de seguridad estratégica internacional.

Mesa 2. ODS 7: Energía asequible y no contaminante

Andrés Rebolledo, Secretario Ejecutivo de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (OLACDE), en su calidad de moderador, señaló que la mesa consideraría la situación de América Latina y el Caribe en relación con la energía, un tema situado en el centro de las discusiones geopolíticas. Se refirió a la importancia de tener en cuenta el contexto internacional, que aumentaba la presión en el avance de las metas e indicadores del ODS 7, ya que, aunque la región tenía un sector energético con una gran vocación de renovabilidad, también exportaba crudo y seguía importando derivados. Destacó, además, que la electricidad ocupaba un lugar central en la transición energética, especialmente por su vínculo con la industria y el transporte. En relación con los indicadores, mencionó el avance sistemático de la renovabilidad, y que la cobertura eléctrica se aproximaba al 98% en la región, y resaltó la importancia de atender también a la disponibilidad, las pérdidas de los sistemas eléctricos y la eficiencia energética. En este sentido, subrayó la necesidad de hacer mayores esfuerzos de coordinación entre los actores y respecto del financiamiento. Era necesario aumentar la oferta, ya que la demanda crecía a un ritmo muy superior.

Mauricio Bejarano, Viceministro de Minas y Energías del Paraguay, se refirió a la ventaja competitiva del Paraguay en relación con el ODS 7, en particular en lo referido a la energía eléctrica, porque el país contaba con un 100% de energía renovable y una producción hidroenergética abundante que sobrepasaba las necesidades internas. Indicó, sin embargo, que el crecimiento de la demanda eléctrica representaba un desafío cada vez mayor, pese al excedente existente, en un contexto de transición energética mundial y nacional. Un objetivo era aumentar la cobertura al 100%. Subrayó que la asequibilidad seguía siendo un tema central y que el país procuraba aumentar las fuentes de generación de energía nuevas y el número de megavatios generados sin que afectara dicha asequibilidad, para lo cual habían promovido leyes de fomento de las energías renovables, en particular de la energía fotovoltaica. Por otra parte, destacó que la abundancia hacía que el país no tuviera una cultura de eficiencia energética, lo que iba a exigir educación de la ciudadanía para equilibrar la oferta y la demanda. Por último, indicó que el país resultaba atractivo para los grandes consumidores de energía, mientras que el mayor desafío seguía siendo la dependencia de los hidrocarburos refinados importados.

Javier Tapia, Director Ejecutivo de Transmisoras de Chile, señaló que la preocupación se estaba desplazando de la capacidad instalada y de generación a la capacidad de adaptación, en un contexto en que el papel de la electricidad se vinculaba cada vez más con el crecimiento y el desarrollo, y también los objetivos climáticos. Indicó que, aunque América Latina y el Caribe registraba porcentajes muy elevados de energías

renovables en su matriz energética, esto no se traduciría necesariamente en menores costos para los usuarios, y subrayó que persistía el desafío de diseñar sistemas eléctricos seguros y resilientes, dado el acelerado cambio del entorno climático. Faltaban redes adecuadas para aprovechar plenamente el potencial de generación. La demanda era cada vez más dinámica y la sociedad esperaba mayores niveles de confiabilidad, lo que requería planificación y buena regulación. Destacó, asimismo, la importancia de la seguridad energética y afirmó que la región tenía una oportunidad histórica, por su experiencia en energías renovables e integración regional, aunque para cumplir los objetivos climáticos y de electrificación de la demanda sería necesario aumentar la inversión en redes, duplicar la capacidad de transmisión hacia 2040 y situar este tema en el centro del desarrollo y del crecimiento.

María José Lubertino, representante de la Red Ecofeminista LAC y la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, señaló que el cumplimiento del ODS 7 debía ser transversal respecto de otros Objetivos, en particular los relacionados con el clima, y que era preciso reconocer el derecho a la energía como un derecho humano básico. Advirtió que la expansión de la demanda energética global estaba radicalizando un patrón de extractivismo y expropiación de los bienes comunes. El avance hacia el ODS 7 era lento y profundamente desigual, en una región donde todavía 19 millones de personas carecían de electricidad. Las fuentes de generación estaban a gran distancia de los lugares de consumo, lo que encarecía los precios. Como sociedad civil, denunciaban esa precariedad, que afectaba de manera desproporcionada a las mujeres, y reclamaban políticas regionales que garantizaran la sostenibilidad mediante una reconversión productiva que colocara los derechos humanos y laborales y la apropiación comunitaria en el centro. Asimismo, instó a los países a que ratificaran el Acuerdo de Escazú, porque no habría transición energética sin protección de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Hizo un llamado también a incrementar la inversión en investigación soberana y a promover una transición tecnológica mediante la cooperación Sur-Sur y triangular. Por último, sostuvo que la transición debía fortalecer el patrimonio público, en el marco de una transición energética justa, ecofeminista y popular.

Astrid Puentes Riaño, Relatora Especial sobre el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible (virtual), señaló que era importante considerar el ODS 7 en conjunto y con una perspectiva de derechos humanos. Mencionó también el derecho a un ambiente sano, entendido no solo como la protección de los ecosistemas y la biodiversidad, sino también como aire limpio y un clima seguro. Aunque algunos países estaban reduciendo su dependencia del carbón, en otros aumentaban el uso de energías altamente contaminantes y la operación de termoeléctricas. Para atender la demanda, era necesario aprender de los errores del pasado, considerar los efectos de la crisis climática y buscar fuentes alternativas de energía. Por último, advirtió sobre la falta de reglamentación y recaló la obligación de los Estados de realizar evaluaciones independientes y transparentes de los proyectos que garantizaran el acceso a la información y la participación pública y la justicia, así como de reglamentar y controlar las actividades empresariales, tanto públicas como privadas, y la necesidad de que el sector empresarial asumiera sus obligaciones para evitar mayores impactos ambientales y garantizar el respeto a los derechos humanos.

Francesco La Camera, Director General de la Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA), afirmó, en un mensaje pregrabado, que en 2025 se había registrado el mayor aumento de la capacidad mundial de energía renovable gracias al notable crecimiento de la energía solar y eólica. Las energías renovables no eran una alternativa, sino la columna vertebral de la generación de energía. La tendencia al alza de la capacidad instalada en la región, en todas las tecnologías, había servido de trampolín para la descarbonización y el crecimiento sostenible. Así lo había puesto de manifiesto un informe de la IRENA³, en el que se indicaba que el objetivo de alcanzar un 98% de energías renovables para 2050 era técnicamente factible y podría generar millones de puestos de trabajo y aportar beneficios socioeconómicos. Sin embargo, era necesaria una inversión considerable. El liderazgo de la región era fundamental para

³ IRENA (2025), *Regional energy transition outlook: South America*, International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.

alcanzar los objetivos de capacidad instalada y eficiencia energética. Para aprovechar su inmenso potencial, era necesario actuar en varios frentes: desde las infraestructuras y las cadenas de suministro hasta las competencias técnicas, la innovación y el uso de la tecnología en los sistemas energéticos, todo ello respaldado por un financiamiento accesible y la cooperación internacional. Los países debían reforzar sus estrategias energéticas y adoptar la vía más resiliente y económicamente viable para el desarrollo, la seguridad energética y la descarbonización. El éxito no se mediría en gigavatios, sino en los beneficios que reportaría a la población.

Intervenciones de las delegaciones

La representante del **Perú** señaló que la transición energética constituía una condición indispensable para avanzar hacia un desarrollo más sostenible, inclusivo y resiliente. Pese a sus avances, el Perú aún enfrentaba retos para incorporar las energías renovables, y mejorar la eficiencia energética en todo el país. El representante de **México** resaltó que la transición energética era una oportunidad para transformar la forma en que se producía y usaba la energía, y colocar el bienestar de las personas en el centro. No podía haber sostenibilidad sin bienestar, ni crecimiento sin inclusión. El representante de **Panamá** señaló que su país había sido reconocido oficialmente como país con emisiones negativas de carbono. Asimismo, propuso cooperar a nivel regional a través del establecimiento de un mercado de excedentes renovables mediante la optimización de la interconexión eléctrica regional.

La representante de **Saint Kitts y Nevis** dijo que el país tenía objetivos ambiciosos: que casi el 100% de la energía renovable procediera de la energía geotérmica y solar para 2030, modernizar la red eléctrica con cables subterráneos y establecer una conexión submarina para transportar la energía desde Nevis. El financiamiento innovador y basado en donantes, las alianzas público-privadas, el intercambio de conocimientos y la transferencia de tecnología eran esenciales. Era importante recordar que el objetivo de la transición energética era velar por los más vulnerables y proteger vidas, medios de subsistencia y el medio ambiente. La representante de **Suriname** dijo que, con el fin de diversificar el suministro energético, se estaban introduciendo soluciones renovables para complementar la generación de energía existente y reforzar la resiliencia en zonas remotas donde la ampliación de la red eléctrica tradicional resultaba difícil y costosa, una solución no solo respetuosa con el medio ambiente, sino también práctica. Era necesario adoptar medidas rigurosas en materia de eficiencia energética en todos los sectores ya que ello significaba la reducción de los costos operativos, el refuerzo de la seguridad energética nacional y el aprovechamiento de los escasos recursos disponibles en un contexto de crecientes necesidades de inversión.

El representante del **Brasil** reafirmó el compromiso de su país con las transiciones energéticas limpias, estratégicas e inclusivas, y señaló que la transición hacia un futuro sostenible no podía reproducir antiguos patrones de exclusión o conflictos territoriales. El representante de **Cuba** destacó que la energía asequible y no contaminante era la base sobre la que se construía la justicia climática, el desarrollo sostenible y la dignidad de los pueblos, y recordó que la acción climática debía reconocer las realidades específicas de cada nación. La representante del **Ecuador** señaló que su país había registrado avances en la diversificación de su matriz energética, con una alta participación de generación de origen renovable; sin embargo, enfrentaba el desafío de la elevada dependencia de la generación hidroeléctrica y la exposición a los riesgos de la variabilidad climática. La representante de **Colombia** destacó que, para su país, la transición justa entrañaba transformaciones sistémicas que trascendían el tema de la energía, e incluían de manera integral dimensiones sociales, económicas y territoriales que garantizaran la equidad, la inclusión y la protección social.

La representante de la **FAO** subrayó la necesidad urgente de ampliar la generación del uso de energías renovables en los sistemas agroalimentarios para garantizar el acceso a una energía asequible, fiable y sostenible para todas las personas. La representante del **ACNUDH** indicó que, desde un enfoque de derechos humanos, se trataba de facilitar una transición energética justa que impulsara economías y

sociedades sostenibles mediante la incorporación de las consideraciones de derechos en las políticas, la planificación y la implementación.

Mesa 3. ODS 9: Industria, innovación e infraestructuras

Ludmila Diniz, Jefa de Alianzas y Relaciones Exteriores de la Oficina para América Latina y el Caribe de la ONUDI, en su calidad de moderadora, destacó que la región venía construyendo las bases para acelerar la implementación del ODS 9 y que, si bien las brechas de infraestructura vial y logística persistían, el apoyo internacional había aumentado notablemente en términos de inversión en infraestructura. Cinco megatendencias redefinían la industria del futuro: la transición energética verde, la aceleración de la inteligencia artificial y la digitalización de la producción, la reconfiguración de las cadenas globales de valor, los cambios demográficos y la transformación de los sistemas alimentarios.

Hugo Rivera, Viceministro para Asuntos Económicos y Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, hizo referencia a los cambios que se habían dado en la industria de su país y a las diferencias que existían entre los encadenamientos productivos de la región y los de otros lugares del mundo. Para construir nuevas capacidades comerciales había que acceder a nuevas fuentes de financiamiento. Debía apostarse por acelerar la industrialización, que era una fuente de capacitación y creación de empleo directo, y aumentar la inversión en las capacidades industriales de los países de la región. Mencionó que los diferentes bloques económicos, por ejemplo la CARICOM, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA), no se comunicaban entre sí y que, por lo tanto, las reglas de los países de la región no estaban armonizadas, lo que tenía incidencia en la industria de alimentos y bebidas y en la industria farmacéutica. Dijo que mientras mayor fuera la integración regional, mayor sería la industrialización de la región.

Joyelle Clarke, Ministra de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Acción Climática y Empoderamiento del Electorado de Saint Kitts y Nevis, dijo que el Objetivo 9 era el material y el cemento que sostenía el desarrollo, el andamiaje del progreso y el motor de las capacidades institucionales, la visión de futuro y la inversión estratégica. Su país se centraba principalmente en las industrias sostenibles y en las infraestructuras resilientes al cambio climático. Tras destacar varios proyectos de obras públicas que habían tenido éxito, especialmente en lo referido a acelerar la transición hacia sistemas energéticos y de transporte con bajas emisiones de carbono, afirmó que países como el suyo no tenían más opción que financiar sus propios éxitos.

Rodrigo Bustos, Gerente General de la Banca Ética Latinoamericana (BELAT), explicó que BELAT, que pronto cumpliría diez años y tenía oficinas en la Argentina, el Brasil, Chile y el Uruguay, era un grupo financiero de inversión y financiamiento dirigido a empresas de impacto positivo. El propósito de un banco ético tenía que ver con el uso consciente del dinero, que modelaba sociedades y economías al tiempo que construía o destruía valor. Si se fomentaba el uso consciente del dinero, orientando los recursos hacia sectores de impacto positivo (cultura, producción audiovisual, medio ambiente, vivienda o salud), podría alcanzarse el ODS 9.

Marco Antonio Moreno Ibarra, Director General de Desarrollo, Transferencia de Tecnología e Innovación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación de México (virtual), expresó que el Gobierno de su país impulsaba la soberanía tecnológica mediante diversos proyectos estratégicos con los que se buscaba sustituir importaciones en rubros como semiconductores, inteligencia artificial, vacunas y alimentos. Se apostaba por los laboratorios nacionales y los incentivos fiscales para propiciar el desarrollo de distintos proyectos tecnológicos, así como por el establecimiento de una relación de confianza entre los distintos sectores.

Intervenciones de las delegaciones

El representante del **Brasil** dijo que su país trabajaba en la descarbonización, la bioeconomía y la transformación digital. La construcción de infraestructuras resilientes y el impulso a la industria debían alinearse con el desarrollo sostenible, en sus dimensiones económica, social y ambiental, y la tecnología y la industria debían ser herramientas para reducir desigualdades y proteger a los más vulnerables. La representante del **Perú** afirmó que el país había registrado avances en infraestructura, industrialización, innovación, transporte, financiamiento para pequeñas y medianas empresas (pymes) e investigación científica, pero aún era necesario fortalecer la inversión en investigación, tecnología y desarrollo industrial. El representante de **México** indicó que, si bien los retos persistían, la región mostraba avances en relación con el ODS 9, y que el desarrollo industrial era esencial para crear economías que resistieran imprevistos (incluso climáticos), ya que estimulaba el crecimiento, generaba más empleo y mejoraba los salarios y las condiciones de vida. La representante del **Ecuador** subrayó que el financiamiento podía convertirse en una herramienta transformadora al canalizar recursos hacia proyectos de alto impacto. El país había progresado en materia de conectividad digital e inclusión tecnológica, acceso a conocimientos en el ámbito productivo y modernización del marco normativo.

La representante de la **ONUDI** señaló que, mientras que a nivel mundial se constataba un avance heterogéneo hacia el logro del ODS 9, la región, que no solo crecía poco, sino que estaba perdiendo capacidades industriales, era la única con una tendencia a la baja en el índice industrial de ese Objetivo. La representante de la **FAO** presentó cuatro áreas clave de acción: fomento de una industrialización inclusiva y sostenible en las zonas rurales; mejora de las cadenas de valor; cierre de brechas digitales y de infraestructura, y ampliación del acceso a servicios financieros rurales inclusivos.

Un representante de la sociedad civil destacó la importancia del cooperativismo para absorber el desempleo que existía en la región, donde ya se registraban experiencias de gestión comunitaria, por ejemplo, ante la devastación provocada por incendios forestales o el cierre de grandes empresas.

Para finalizar, **la moderadora** recordó que el 21 de abril se celebraría el primer Día Internacional de las Mujeres en la Industria, al tiempo que destacó la importancia del sector financiero para la transformación productiva y de las políticas industriales para la soberanía tecnológica, así como la necesidad de fortalecer las alianzas multilaterales. La industrialización verde era una oportunidad económica para diversificar exportaciones, crear empleos y atraer inversión de mayor valor.

Mesa 4. ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

Elkin Velásquez, Director Regional para América Latina y el Caribe de ONU-Hábitat, en su calidad de moderador, señaló que el ODS 11 era sobre el que se disponía de menor cantidad de datos para hacer un seguimiento permanente, por lo que había que trabajar más en ello para conocer la evolución de las ciudades y su desempeño. Las cifras de asentamientos informales se habían mantenido estabilizadas en los últimos cinco años y en América Latina y el Caribe había buenos ejemplos de cómo abordar esta situación, lo que podía ayudar a continuar fortaleciendo el espacio multilateral de intercambio y construcción colectiva de soluciones. Destacó la capacidad de la región para buscar soluciones, así como el compromiso de los jóvenes con la transformación de las ciudades. Finalmente, se refirió a un activo fundamental en la región: las 18.000 autoridades locales y entidades subnacionales que trabajaban a diario, enfrentaban dificultades e innovaban en beneficio de sus ciudades.

Tamara Paseyro, Ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Uruguay y Presidenta del Foro de Ministros y Autoridades Máximas de la Vivienda y el Desarrollo Urbano de América Latina y el Caribe (MINURVI), se refirió a la larga tradición de planificación territorial de su país. La ciudad se había tratado durante décadas como una suma de partes y las políticas estaban fragmentadas. El ODS 11

exigía ver la ciudad como un sistema, lo que requería nuevas políticas y una forma de medir diferente. Destacó que el Uruguay había enfrentado este desafío y el examen nacional voluntario no solo como un ejercicio estadístico, sino también de gobernanza. Entre los aprendizajes, la Ministra señaló que la metodología era una construcción colectiva; el dato, un instrumento de justicia, y la transversalidad, una condición. Subrayó la importancia de la escala subnacional y la urgencia de tratar la brecha entre los gobiernos nacionales y subnacionales. Por último, destacó que el intercambio entre países era una de las herramientas más valiosas para encontrar las respuestas que tuvieran sentido en cada uno de los territorios de la región.

Claudio Orrego, Gobernador de la Región Metropolitana de Santiago, destacó que era el momento de cambiar el debate en América Latina y el Caribe y poner en la agenda el derecho a la ciudad. Santiago enfrentaba profundas desigualdades, desafíos ambientales, inseguridad y fragmentación, ya que se componía de 52 comunas, cada una con su agenda. La pregunta era cómo pasar a una ciudad con una agenda propia y una gobernanza nueva. Señaló que el desafío en las ciudades de la región no era de diagnóstico, sino de gobernanza y ejecución. Confiaba en que el proceso de descentralización continuara en su país, y señaló que el derecho a la ciudad, la gobernanza metropolitana y el cambio climático requerían políticas de Estado, continuidad y mucha perseverancia e innovación. Para terminar, resaltó que, sin la alianza y el empoderamiento de los gobiernos subnacionales, particularmente los metropolitanos, la consecución del ODS 11 no era posible.

Joanna Fischer Battistini, Jefa de Gabinete de Asesores del Ministerio del Ambiente del Perú, se refirió a los problemas comunes mencionados durante la mesa, en particular, las dificultades para establecer una interrelación entre las municipalidades metropolitanas, como Lima, y los municipios pequeños. Destacó el valor del Ministerio del Ambiente, que permitía hacer políticas públicas para reorganizar las ciudades y tener un ordenamiento territorial con base en las políticas ambientales. La interrelación entre la municipalidad, el gobierno regional y el poder Ejecutivo era imprescindible. Mencionó los avances del Perú en materia de enfoque territorial para una planificación sostenible; los planes locales de cambio climático; la innovación en materia de financiamiento mediante los Mecanismos de Retribución por Servicios Ecosistémicos, con el fin de fortalecer la corresponsabilidad urbano-rural; la infraestructura natural y la gestión preventiva del riesgo; la gestión eficiente de los residuos sólidos, y una transición hacia ciudades con bajas emisiones de carbono. Resaltó que, sin el apoyo entre países, no se podría lograr la América Latina y el Caribe que todos deseaban.

Mauricio Fuentes, Coordinador de la Unidad de Voluntariado y Participación Ciudadana del Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) de Chile y punto focal para el Año Internacional del Voluntariado para el Desarrollo Sostenible, señaló que avanzar hacia ciudades más sostenibles dependía no solo de la infraestructura y la planificación, sino también del fortalecimiento del tejido social, cívico y comunitario. Subrayó que el voluntariado constituía una forma de participación ciudadana organizada que contribuía a fortalecer la cohesión social y la inclusión y generar redes de colaboración, por lo que representaba una forma de infraestructura social. Destacó su aporte a la resiliencia frente a desastres, en particular mediante la articulación entre instituciones y comunidades, y se refirió a la iniciativa Chile se Prepara, orientada a fomentar las capacidades de la población en materia de gestión del riesgo de desastres. Asimismo, destacó el papel de las juventudes como actores clave en la transformación de sus comunidades y en la construcción de territorios más inclusivos y sostenibles. Concluyó que las ciudades sostenibles requerían comunidades activas, y que la colaboración entre el Estado y la sociedad civil era indispensable para avanzar en la consecución de los ODS.

Intervenciones de las delegaciones

El representante de **México** señaló que su plan nacional de desarrollo impulsaba una estrategia que ponía en el centro a las personas, y los proyectos de movilidad y conectividad nacían de la planificación urbana dirigida a cerrar brechas, crear oportunidades y fortalecer el tejido social, con criterios de sostenibilidad y perspectiva de género. El representante del **Brasil** mencionó que la gobernanza urbana debía basarse en los

derechos humanos, con planificación territorial inclusiva y reconocimiento de los impactos desproporcionados en las poblaciones en situación de vulnerabilidad, como las personas en situación de calle o con discapacidad. La representante de **Saint Kitts y Nevis** señaló que su país estaba promoviendo el Objetivo 11 mediante un enfoque centrado en las personas, ampliando el acceso a la tierra y la seguridad de la tenencia, regularizando los asentamientos informales e invirtiendo en viviendas adaptadas al clima, infraestructuras resilientes, renovación urbana y servicios sociales integrados. La representante de **Curaçao** destacó su estrategia nacional para el período 2025-2029, centrada en la resiliencia, la gobernanza y el desarrollo sostenible, y reafirmó el compromiso con el Objetivo 11 mediante el uso de sistemas de datos más sólidos y la aplicación de reformas inclusivas, al tiempo que se integraban aún más los ODS en la planificación del desarrollo nacional.

El representante de la Oficina del **Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)** agradeció el apoyo de las ciudades en la región, que eran espacios de protección, acogida e integración, y demostraban a diario su solidaridad, y mencionó distintos mecanismos que las ciudades y municipios habían creado para integrar a las personas refugiadas, desplazadas y apátridas. El representante de la **FAO** se refirió al programa mundial para aprovechar los sistemas agroalimentarios urbanos y locales para la transformación sostenible, que consideraba los territorios alrededor de las ciudades como espacios vivos que mantenían el flujo alimentario en las ciudades, algo particularmente importante en un continente cada vez más urbanizado. La representante del **UNICEF** mencionó iniciativas dirigidas a que la niñez se tuviera en cuenta en la planificación urbana y recomendó, entre otras cosas, que se institucionalizaran los marcos locales de gobernanza a favor de la niñez y se invirtiera en servicios comunitarios de cuidado y protección social a nivel local. La representante del **ACNUDH** destacó que el ODS 11 estaba intrínsecamente vinculado a los derechos fundamentales, e hizo un llamado a trabajar con los gobiernos locales porque, al ser el nivel más cercano a las comunidades, estaban en una posición privilegiada para traducir las normas internacionales de derechos humanos en soluciones prácticas a nivel local. El representante de **ONU-Mujeres** puso el foco en dos dimensiones clave para la igualdad de género y la sostenibilidad urbana: las ciudades seguras y las ciudades que cuidan. En este sentido, se refirió a la necesidad de planificación urbana, marcos normativos y transformación de las normas sociales, y al reconocimiento del cuidado como un pilar del desarrollo sostenible.

Mesa 5. ODS 17: Alianzas para lograr los Objetivos

Héctor Francisco Ochoa Moreno, Director General del Secretariado Ejecutivo del Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de México, en su calidad de moderador, invitó a preguntarse si los esfuerzos en favor del desarrollo sostenible se estaban traduciendo en resultados concretos para las personas. El debilitamiento del multilateralismo, las tensiones geopolíticas y los cambios en las reglas del comercio afectaban la cooperación internacional y limitaban la capacidad de responder a desafíos comunes. A menos de cinco años de 2030, se necesitaban alianzas más estratégicas que conectaran lo local con lo global, articularan distintos sectores y alinearan los recursos con prioridades claras, así como políticas públicas que integraran mejor sus instrumentos.

Enrique O’Farrill, Director Ejecutivo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID), señaló que ya en la Octava Reunión del Foro se había reafirmado que el multilateralismo era una necesidad, no una opción. En un escenario más complejo que el de entonces, Chile proponía avanzar en cuatro ejes: reposicionar la cooperación Sur-Sur y triangular como eje estratégico; acelerar la reforma de los criterios para poder optar a la cooperación internacional; activar plenamente los instrumentos de financiamiento innovador, que no dependían solo de la voluntad política de los donantes tradicionales, y fortalecer las capacidades estadísticas nacionales para favorecer las alianzas y la rendición de cuentas.

Martín Francos, Viceministro de Planificación e Inversión Pública del Ministerio de Hacienda y Economía de la República Dominicana, afirmó que los desafíos regionales para la movilización de recursos incluían las brechas de financiamiento, la insuficiente recaudación, los altos niveles de deuda pública y evasión fiscal, y la baja participación en el comercio mundial. Para que los esfuerzos en ese ámbito se transformaran en resultados permanentes, era necesario superar las brechas en la calidad de los datos y contar con una institucionalidad sólida y equitativa, así como con la cooperación entre los países.

Héctor Javier Guzmán, Secretario del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destacó que las alianzas eran necesarias para cerrar las brechas de financiamiento, fortalecer las capacidades institucionales y sostener la cooperación internacional. Las transformaciones que demandaba la Agenda 2030 requerían cooperación, coordinación y confianza entre las instituciones, y la capacidad de traducir esas alianzas en soluciones tangibles y escalables. Se refirió al papel de la banca de desarrollo y del BCIE en el logro del ODS 17 y señaló que la cooperación permitía transformar los compromisos en resultados concretos.

Iván Flores García, Senador de Chile, en su calidad de Presidente de ParlAmericas, mencionó la gran preocupación de algunos organismos por la forma en que se relativizaba la democracia y dijo que, en el complejo contexto internacional en que se vivía, el ODS 17 adquiría máxima relevancia. Los Parlamentos cumplían una función central en los espacios multilaterales, donde los compromisos internacionales requerían traducción normativa, respaldo presupuestario, seguimiento institucional y continuidad en la decisión política. Destacó el valor estratégico de la cooperación interparlamentaria y se refirió al esfuerzo de ParlAmericas mediante sus redes en materia de igualdad de género, transparencia, cambio climático y sostenibilidad, y seguridad.

Intervenciones de las delegaciones

El representante de **Panamá** dijo que el financiamiento regional se podía lograr con orden y confianza. El país proponía una coalición de países de renta media para lograr cumplir los requisitos para lograr financiamiento ante los organismos multilaterales, y planteaba que el cumplimiento de metas climáticas y sociales fuera ponderado con el mismo peso que el PIB. La representante de **Suriname** señaló que las alianzas de financiamiento seguían siendo demasiado limitadas, las iniciativas de desarrollo de capacidades continuaban centrándose excesivamente en actividades individuales y las colaboraciones en materia de tecnología y conocimientos seguían siendo desiguales, con obstáculos para acceder a las herramientas digitales, las plataformas de innovación y los conocimientos técnicos. Un representante de la sociedad civil expresó la convicción de que las alianzas debían ser inclusivas, equitativas y sostenibles y garantizar la participación de todos los actores, y reafirmó el compromiso con las causas sociales, las juventudes, las personas con discapacidad, las que vivían con VIH/Sida, las pertenecientes a la población LGBT y las mujeres.

La representante de **Guatemala** destacó que el ODS 17 permitía articular políticas, armonizar criterios y fortalecer mecanismos de seguimiento que multiplicaban el impacto de los compromisos nacionales, y describió los efectos que tenía el examen nacional voluntario de 2025 del país como herramienta estratégica de planificación y rendición de cuentas. La representante del **Perú** señaló que el principal desafío seguía siendo lograr una articulación efectiva entre las alianzas, las prioridades nacionales y las necesidades de los territorios. El país reafirmaba la importancia de fortalecer la cooperación internacional, promoviendo alianzas inclusivas, eficaces y orientadas a resultados. El representante del **Brasil** afirmó que el éxito de la Agenda 2030 dependía de la revitalización de los medios de implementación y de una acción colectiva solidaria. Describió el mecanismo paritario con que contaba el país para llevar adelante la Agenda 2030, que garantizaba el diálogo entre el Estado y la sociedad civil, y el trabajo conjunto a nivel federal y local.

La representante de **Colombia** hizo referencia al complejo momento histórico que se vivía y a la crisis del multilateralismo, y destacó la riqueza de recursos, capacidades y diversidad de la región, y la importancia

de hacer un llamado en relación con el respeto a la soberanía de los Estados y los pueblos. La representante del **Ecuador** destacó que el ODS 17 fortalecía la cooperación en ámbitos clave como el financiamiento, la tecnología, el comercio y el desarrollo de capacidades, esenciales para abordar desafíos globales como la pobreza, la desigualdad y el cambio climático, y se refirió a un conjunto de esfuerzos que el país llevaba adelante en ese ámbito. El representante de las **Islas Vírgenes Británicas** señaló que, aunque se había dedicado mucho esfuerzo al índice de vulnerabilidad multidimensional, al parecer este había quedado relegado a un segundo plano, ya que los países donantes se centraban en la seguridad nacional, lo que dejaba pocas opciones a los países de renta media para financiar su recuperación de las crisis provocadas por el cambio climático.

El representante del **PNUMA** se refirió al trabajo del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, principal instancia de diálogo político y cooperación en materia ambiental de la región, y sus diversas alianzas y grupos de trabajo en áreas como la contaminación ambiental, los contaminantes y los residuos y la economía circular. El representante del **Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)** puso de relieve las implicaciones de gran alcance que los cambios demográficos tendrían en el desarrollo sostenible y afirmó el compromiso de esa entidad de acompañar a los países en el fortalecimiento de alianzas en torno a las dimensiones interdependientes de la dinámica poblacional y el cambio demográfico, y en la generación y utilización de datos demográficos para la generación de políticas. La representante de la **FAO** dijo que, para ese organismo, la única cifra aceptable en relación con el hambre era cero. Subrayó la necesidad de fortalecer el vínculo entre ciencia y política, cerrar brechas en el acceso a la innovación, contar con un sistema de comercio abierto, inclusivo y basado en normas, fortalecer las cadenas de valor y fomentar las microempresas y las pequeñas y medianas empresas.

Una representante de la Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas destacó la importancia de promover alianzas inclusivas y orientadas a resultados que integraran a los Gobiernos, las comunidades, el sector privado, las organizaciones sindicales y la sociedad civil, asegurando la coherencia con las normas internacionales de derechos humanos y derechos laborales.

Espacio para la lectura de las declaraciones de múltiples actores

Se dio lectura a la Declaración de la Sociedad Civil, la Declaración del Foro de Niñas, Niños, Adolescentes y Juventudes de América Latina y el Caribe y la Declaración del Foro Interreligioso de la Novena Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible⁴.

DIÁLOGOS DE ACCIÓN NACIONAL

Sesión sobre experiencias nacionales exitosas para acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Roberto Valent, Director Regional para América Latina y el Caribe de la Oficina de Coordinación del Desarrollo (OCD) de las Naciones Unidas, en su calidad de moderador, señaló que en la región existían iniciativas de inteligencia artificial, como las incluidas en la Agenda Digital para América Latina y el Caribe y el Observatorio de Inteligencia Artificial en Educación para América Latina y el Caribe, lanzado por la UNESCO en el marco del Foro. El reto era conectar esas iniciativas y potenciar su impacto colectivo. Afirmó que la inteligencia artificial podía contribuir a impulsar políticas públicas y mejorar la

⁴ Véanse las declaraciones [en línea] <https://foroalc2030.cepal.org/2026/es/programa/lectura-declaraciones-multiples-actores>.

capacidad de prever escenarios futuros, pero enfrentaba obstáculos, como la brecha en las capacidades institucionales, los riesgos éticos y de transparencia y las limitaciones lingüísticas.

Lisa Kurbiel, Jefa de la Secretaría del Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, afirmó que la inteligencia artificial no era una capacidad del futuro, sino que ya estaba transformando la forma en que se prestaban, financiaban y supervisaban los servicios públicos. La cuestión era cómo la comunidad internacional podía ponerla en práctica de manera responsable y lograr resultados a gran escala, al tiempo que se reforzaba la implicación nacional y la cooperación regional y se evitaban los compartimentos estancos. El multilateralismo servía para impulsar la integración regional y el Fondo se había creado como una herramienta destinada a apoyar la transformación y subsanar las deficiencias en ámbitos como la fragmentación normativa e institucional, el análisis de los riesgos y la tolerancia a ellos, y la capacidad. Una de las ventajas de la programación conjunta era reducir los riesgos de la experimentación inicial y ayudar a los gobiernos a pasar de la fase piloto a la práctica. La región tenía mucho que ganar al reconocer la inteligencia artificial como un bien público regional. El sistema de las Naciones Unidas podría respaldar una iniciativa regional en materia de inteligencia artificial para acelerar el cumplimiento de los ODS. Las ventajas de la prueba y el desarrollo conjuntos de servicios basados en la inteligencia artificial eran tres: un aprendizaje y una escalabilidad más rápidos, menores costos y una menor fragmentación normativa.

Marco Llinás, Director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la CEPAL, afirmó que las iniciativas de transformación digital y la inteligencia artificial eran un vehículo para superar las trampas del desarrollo. Como ejemplo, mencionó la Agenda Digital para América Latina y el Caribe, que permitiría que los países y territorios de la región avanzaran hacia un uso real y efectivo de las tecnologías digitales. Se refirió a los tres ámbitos de acción de la Agenda: conocimiento y monitoreo, diálogo de políticas y herramientas y asistencia técnica. Para concluir, llamó a aprovechar al máximo las herramientas de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe y a coordinar posiciones a nivel regional.

Esther Kuisch Laroche, Directora de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la UNESCO, hizo referencia al impacto de la inteligencia artificial en la educación y dijo que, si bien brindaba numerosas oportunidades, como la inclusión de niños con discapacidades, también reforzaba los desafíos ya existentes, como la escasez de docentes y el abandono escolar. En ese sentido, describió las principales características y objetivos del Observatorio de Inteligencia Artificial en Educación para América Latina y el Caribe e invitó a construirlo entre todos a partir de las realidades de cada país.

Sergio Scarabino, Representante para América del Sur de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), afirmó que la plataforma insignia de las Naciones Unidas sobre inteligencia artificial, AI for Good, establecida por la UIT, ya se aplicaba en la gestión del agua, la eficiencia energética y el desarrollo de ciudades sostenibles. Además, ofrecía algunas ventajas derivadas del papel normativo y la especialización técnica, y de la posibilidad de conectar el ámbito mundial con el local. Señaló que la inteligencia artificial podía ser un poderoso acelerador del cumplimiento de los ODS, especialmente en los países en desarrollo, y, para ello, era necesario contar con capacidades, infraestructura, marcos de gobernanza y cooperación internacional.

Bibiana Aído, Directora Regional para las Américas y el Caribe de ONU-Mujeres, dijo que la tecnología podía ser un acelerador del cumplimiento de los ODS si se diseñaba con un enfoque de derechos y de género y con la participación de las mujeres. Sin embargo, existían brechas relativas a la integración de las mujeres en la fuerza laboral en el ámbito de la inteligencia artificial y en su acceso a Internet, así como en la forma de abordar los sesgos de género en los sistemas de inteligencia artificial. Se refirió a la herramienta digital de inteligencia artificial que funcionaba en Whatsapp (JulIA) como asistente de educación financiera para mujeres rurales mayores de 60 años y el chatbot Presupuestos para la igualdad, destinado a los responsables de elaborar presupuestos con enfoque de género.

Pablo Salazar, Coordinador Residente del sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica, y Paula Bogantes, Ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica, presentaron la visión de su país en relación con la inteligencia artificial, que incluía la transformación digital como condición habilitante y la cooperación internacional como corresponsabilidad estratégica. Además, señalaron que el talento, la infraestructura y los mecanismos habilitadores constituían los cimientos de la transformación digital. Para concluir, destacaron el papel de las Naciones Unidas como aliado estratégico para avanzar en la aplicación de la inteligencia artificial a nivel nacional.

María José Torres Macho, Coordinadora Residente del sistema de las Naciones Unidas en Chile, y Rodrigo Durán, Gerente del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) de Chile presentaron el programa conjunto Comunidades Conectadas y su articulación con el CENIA para poner la inteligencia artificial al servicio de las personas. Se refirieron a la brecha en el acceso a recursos digitales para la educación y a la exclusión digital, que impedía el desarrollo y reforzaba las desigualdades. Destacaron la importancia de generar habilidades digitales para personas indígenas, personas mayores, mujeres y niños. Además, afirmaron que la inteligencia artificial podría acelerar el impacto de los proyectos y tener un gran potencial transformador.

Julia Sánchez, Coordinadora Residente del sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana, y Martín Francos, Viceministro de Planificación e Inversión Pública del Ministerio de Hacienda y Economía de la República Dominicana, presentaron la experiencia de su país y afirmaron que contar con más información y herramientas para decidir permitiría detectar mejor las brechas y responder de manera más efectiva a las necesidades de las poblaciones más vulnerables. En ese sentido, mencionaron la herramienta de etiquetado del presupuesto del Estado con metas ODS, que buscaba determinar en qué medida el gasto público contribuía al cumplimiento de los ODS.

El moderador señaló que el valor de la inteligencia artificial radicaba en su capacidad para resolver problemas específicos, integrarse en las políticas públicas y producir resultados sostenibles. Además, subrayó la importancia del trabajo en red para promover la coordinación, evitar duplicaciones, fomentar capacidades y ofrecer a los países soluciones de inteligencia artificial más coherentes y justas.

Intervenciones de las delegaciones

El representante de **México** dijo que su país había alineado sus proyectos, planes y presupuestos con los ODS y se refirió al Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que contribuía a fortalecer la colaboración interinstitucional y ofrecía asesoría técnica para el diseño de políticas y estrategias en consonancia con los ODS.

Lisa Kurbiel, Jefa de la Secretaría del Fondo Conjunto para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, habló de la iniciativa de la UNESCO en Jamaica sobre ética de la inteligencia artificial, financiada por la Unión Europea, que había dotado al profesorado de Jamaica de las competencias necesarias para promover el uso responsable de la inteligencia artificial en las aulas, reforzado la implicación nacional y adaptado las normas regionales y mundiales al ámbito nacional. Se refirió al uso en Guatemala de la inteligencia artificial a nivel municipal para territorializar la transformación digital, el uso de la inteligencia artificial mediante programas inclusivos y un enfoque en el desarrollo de competencias a nivel local para fortalecer los sistemas estatales. De cara al futuro, señaló que una plataforma regional de inteligencia artificial podría servir como mecanismo de financiamiento, intercambio de información y acceso a conocimientos especializados a solicitud, e instó a la región a recabar el apoyo de socios de confianza para garantizar que estas herramientas estuvieran disponibles de forma automatizada en todos los países hacia 2030. Países como México podían aprovechar su liderazgo, así como el sector privado, con el fin de orientar a otros países de la región.

Pablo Salazar, Coordinador Residente del sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica, invitó a los presentes a reflexionar sobre la integración de los esfuerzos y la búsqueda de una convergencia en las iniciativas e instrumentos de inteligencia artificial y llamó a encontrar las herramientas más precisas y adecuadas para ello.

Julia Sánchez, Coordinadora Residente del sistema de las Naciones Unidas en la República Dominicana, recordó que los países tenían a su disposición el proyecto que habían presentado sobre etiquetado de presupuestos en línea con los ODS, que había demostrado ser muy eficaz y fácilmente adaptable a cada realidad.

María José Torres Macho, Coordinadora Residente del sistema de las Naciones Unidas en Chile, destacó la importancia de contar con liderazgos regionales fuertes y con políticas y marcos regulatorios relacionados con inteligencia artificial que llegaran al usuario final, a las mujeres rurales indígenas, los productores a pequeña escala y los docentes, entre otros.

En el cierre de las intervenciones, **el moderador** señaló que la inteligencia artificial era una herramienta clave para mejorar la calidad de las políticas públicas y producir un impacto concreto en la vida de las personas. Asimismo, dijo que la inteligencia artificial permitiría alcanzar el desarrollo sostenible mediante la vinculación de iniciativas y soluciones. Para concluir, se refirió a los desafíos que exigían marcos sólidos de gobernanza y cooperación continuada, como el relativo al papel de la inteligencia artificial en la educación.

Buenas prácticas y desafíos en la preparación de los exámenes nacionales voluntarios

Rodrigo Arim, Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) del Uruguay, en su calidad de moderador, destacó que los ODS constituían un ejemplo del aporte del multilateralismo y una plataforma que comprometía a los países con una mirada multidimensional del desarrollo; los exámenes nacionales voluntarios eran una muestra tangible de ese compromiso. Compartir experiencias de los procesos de elaboración de los exámenes, intercambiar las mejores prácticas de cada país y transparentar las dificultades era parte de la lógica de la Comunidad de Práctica sobre los exámenes nacionales voluntarios para los países de América Latina y el Caribe. **En su calidad de panelista**, se refirió a dos características del examen nacional voluntario que presentaría su país. La primera era que la institucionalidad estaba radicada en la Presidencia y era liderada por tres entidades de las áreas de planeamiento y presupuesto, estadística y cooperación internacional, que se coordinaban con los demás actores en un proceso que trascendía la preparación del examen, pues operaba como catalizador de la acción. La segunda era que el examen se preparaba a partir de la participación social, con apoyo del sector académico, mediante una plataforma de participación ciudadana digital y talleres presenciales y virtuales.

Lavito Bacarissa, Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional para los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Brasil, destacó la innovación que había significado en 2024 la inclusión de la participación social en la elaboración del examen nacional voluntario del país. El proceso había mostrado una serie de desafíos, que ya se estaban abordando, en áreas como presupuesto, territorialización de la Agenda 2030, preparación de exámenes locales voluntarios, actualización de los ODS a nivel nacional y creación de nuevos indicadores. A ello se sumaba la próxima celebración de la Primera Conferencia Nacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que implicaba una importante movilización nacional, y la elaboración del examen nacional voluntario de 2026.

Carlos Applewhaite, Analista de Desarrollo de la Secretaría de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Instituto de Planificación de Jamaica, se refirió a las lecciones aprendidas de la realización de los exámenes nacionales voluntarios en el país, entre las que destacó que dichos exámenes podían servir de apoyo a los procesos de negociación multilateral. Dijo que el fortalecimiento de los sistemas estadísticos nacionales y las evaluaciones de la capacidad en materia de datos permitían la producción de datos de calidad para medir los avances en los indicadores de los ODS, y que las alianzas estratégicas que facilitaban la implementación, el seguimiento y la coordinación de los ODS reforzaban el proceso de examen.

Joyelle Clarke, Ministra de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Acción Climática y Empoderamiento del Electorado de Saint Kitts y Nevis, señaló que, entre los retos encontrados en el proceso de examen nacional voluntario, figuraban las dificultades estadísticas y la falta de marcos estructurados de participación. Todo ello había impulsado la inversión en un enfoque de transformación digital destinado a mejorar la recopilación y el almacenamiento de datos, así como a fomentar la comunicación y la implicación ciudadana para promover la aceptación y la participación a nivel local.

Intervenciones de las delegaciones

La representante del **Brasil** se refirió a la construcción de ciudades inclusivas, resilientes y sostenibles. Acelerar el logro de los ODS exigía combinar inversión pública, financiamiento, fortalecimiento institucional, planificación territorial, acción climática y participación social. Se trataba de desarrollar capacidades permanentes para transformar las ciudades y reducir las desigualdades. El representante de **México** valoró la experiencia de los exámenes locales voluntarios, que permitían contar con información precisa y contextualizada, asegurando que las decisiones se basaran en datos reales y respondieran a las necesidades específicas de cada comunidad, y se refirió a los avances de su país en ese sentido.

La representante de la **ACNUDH** afirmó que, si bien los exámenes nacionales voluntarios no eran exámenes de derechos humanos, la integración de esos derechos que se observaba en los exámenes de la región contribuía a guiar la formulación de políticas nacionales en beneficio de las personas.

Se aprobaron las conclusiones y recomendaciones acordadas entre los Gobiernos reunidos en la Novena Reunión del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible⁵.

Sesión de clausura

Jorge Félix Rubio, Director General para Asuntos Económicos del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, país que ejercía la Presidencia del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible, dijo que la Novena Reunión del Foro había sido un espacio fructífero de cooperación regional y renovación de compromisos con la Agenda 2030. Se había puesto de relieve la necesidad de cerrar las brechas estructurales en materia tecnológica y productiva, avanzar hacia un financiamiento para el desarrollo más equitativo y eficaz y fortalecer el multilateralismo y la cooperación internacional. Asimismo, se habían tratado los desafíos más críticos que enfrentaba la región, como garantizar el acceso universal al agua y el saneamiento, avanzar hacia una transición energética sostenible y construir ciudades más inclusivas y resilientes. Las experiencias compartidas habían dejado en claro que existía un compromiso común de todos los actores, pero, al ritmo de ese momento, solo una parte de las metas se alcanzarían para 2030, lo que reforzaba la urgencia de acelerar la acción y fortalecer las capacidades institucionales, con voluntad política y participación ciudadana.

José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, señaló que en el Foro se había demostrado la capacidad de los distintos actores de construir acuerdos, articular voluntades, impulsar agendas comunes y, pese a las diferencias, tender puentes y generar confianza. Se habían compartido prácticas que ponían de manifiesto que el cambio era posible y que los análisis y estudios debían conectarse con la experiencia cotidiana para que las ideas se tradujeran en transformaciones reales. Además, agradeció los aportes de múltiples actores, en especial de las personas jóvenes y la sociedad civil. Reafirmó la necesidad de actuar con una voz común en temas clave, como el cambio climático, el financiamiento para el desarrollo y la inclusión social, teniendo en cuenta los derechos humanos. Para concluir, a pesar de que el ritmo de cumplimiento de las metas era insuficiente, llamó a no dar paso al pesimismo y a seguir trabajando con voluntad renovada para lograr avances hacia la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

⁵ Véase [en línea] <https://foroalc2030.cepal.org/2026/es/documentos/conclusiones-recomendaciones-acordadas-gobiernos-reunidos-la-novena-reunion-foro-paises>.